

EL SOCIALISTA

334

Centroamericano



Primera Quincena
Agosto 2021

Guatemala: Q 4.00
Honduras: L 12.00
El Salvador: US\$ 0.60
Nicaragua: C\$ 10.00
Costa Rica: ₡ 500.00

"Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroamericana"

www.elsoca.org

www.facebook.com/elsoca.org

www.twitter.com/elsocca



GUATEMALA.- POR UN PROGRAMA UNITARIO DE LUCHA PARA SACAR AL GOBIERNO DE GIAMMATTEI

PANDEMIA COVID-19: EL MACABRO JUEGO Y LOS JUGOSOS CONTRATOS DE LAS FARMACÉUTICAS



CRISIS ECONÓMICA E INSEGURIDAD: FLAGELOS COTIDIANOS EN HONDURAS

EL SALVADOR.- BUKELE RESPONDE CON LA MILITARIZACIÓN



EL SALVADOR.- A luchar por la defensa de los fondos de pensiones



NICARAGUA.- La liquidación del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL)



COSTA RICA.- Ley de Empleo Publico atenta contra la Constitución

HONDURAS.- ¿LOGRARÁ LA OPOSICIÓN DERROTAR EL CONTINUISMO EN LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE?

En la última década, Honduras ha sido sacudida por constantes convulsiones sociales. A manera de ejemplo, podemos citar 7 meses de lucha continua para revertir el golpe del 2009, la colosal lucha de los docentes en el 2010 y 2011 en defensa del INPREMA, las movilizaciones de las antorchas en el 2015 exigiendo una CICIH, la terrible convulsión social posterior al fraude electoral de noviembre del 2017, las movilizaciones de médicos y docentes en el 2019 en defensa de la salud y educación pública, etc.

En todas esas luchas el pueblo respondió combativamente, y por errores o ya sea actuaciones consientes de las conducciones de los partidos políticos tradicionales, el régimen dictatorial del Partido Nacional (PN) terminó imponiendo sus leyes y su ritmo. Cuando se encontraba acorralados por las protestas populares, el PN llamó a dialogar y las dirigencias políticas adormecieron a las masas, conduciéndolas a terribles derrotas.

Y así en medio de la enorme crisis económica y social, vamos a un nuevo proceso electoral en noviembre de este año. Nuevamente, las elecciones despiertan ilusiones sobre la posibilidad de tirar al traste a 12 años de gobierno del PN, dirigido por Juan Orlando Hernández.

La campaña electoral ha coincidido con el debate nacional sobre las ZEDES. El PN, apoyado por grupos de poder, los bancos y algunas iglesias, pretende vender la soberanía de Honduras en pedazos y por unas cuantas monedas

Vamos a elecciones sin que se haya aprobado una reforma electoral democrática. El Consejo Nacional Electoral (CNE) vino a sustituir al antiguo Tribunal Supremo Electoral (TSE), más por exigencias de los cooperantes externos que por presión interna. Los diputados del partido LIBRE a través de su "insurrección legislativa" en el año 2019, lograron que los concejales se distribuyeran entre los 3 partidos de mayor caudal electoral: PN, LIBRE y PLH.

El establecimiento e institucionalización del tripartidismo se ha convertido en la base fundamental para el continuismo del PN. Obviamente, la crisis económica y social, las protestas populares, ha erosionado el proyecto continuista del PN. Una muestra de esas grietas que se perciben es que hay síntomas de crisis y división dentro del gobernante PN.

El PN controló libremente las elecciones del 2013 y 2017, pero en esta ocasión, hay también signos de crisis y división entre los grupos de poder. Las concejales Rixi Moncada de LIBRE y Ana Paola Hall del PLH hacen múltiples esfuerzos para transparentar las elecciones. La repuesta de los diputados del PN no se hizo esperar: boicotearon la aprobación del presupuesto adicional solicitado por el CNE para la aplicación del TREP (Transmisión de Resultados Preliminares) y la compra de tablas tecnológicas para el escaneo de las actas electorales.

Según la concejal, Rixi Moncada, con la aplicación de las TREP el fraude se ha desmontado en un 80 %. Sin embargo, lo único que puede abortar un nuevo fraude electoral es la participación decisiva de los votantes para cambiar al gobierno.

La guerra de las encuestas ya se inició, entre los candidatos más votados de los que se mencionan está Xiomara Zelaya de LIBRE, Nasry Asfura del PN, Salvador Nasralla del partido "Salvador de Honduras" y Yani Hidalgo Rosenthal del PLH, independientemente de quien arrojen las encuestas que va en primer lugar, el gran ganador es el voto independiente manifestado que "no sabe" por quién votar. Este segmento anda en más del 30 %, capaz e inclinar la balanza a cualquier lado.

La estrategia continuista del PN se ha basado en la dispersión de la oposición, en una alta abstención, que relativiza hacia arriba su voto cautivo. Si este esquema de dispersión de la oposición se mantiene, y ninguna de las opciones electorales actuales logra convencer a la mayoría de los votantes, el futuro es incierto. ■

EL SOCIALISTA
Centroamericano

ESCA No. 334
Primera Quincena
de Agosto 2021

Impresión:
10 de Agosto de 2021

DIRECTOR:

Nassar Echeverría

CONSEJO EDITORIAL:

Armando Tezucún,
Germán Aquino,
Alberto Castro,
Melchor Benavente,
Eduardo Villalobos,
José Manuel Flores Arguijo
(in Memoriam).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Ricardo Ruiz

AQUI NOS ENCONTRÁS

www.elsoca.org
facebook.com/elsoca.org
twitter.com/elsoca

Redacción:

elsoca@elsoca.org

Secretariado Ejecutivo:

psoca@elsoca.org

Secciones:

psoca_guatemala@elsoca.org
psoca_salvador@elsoca.org
psoca_honduras@elsoca.org
psoca_nicaragua@elsoca.org
psoca_costarica@elsoca.org

EL SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
es una publicación del
PARTIDO SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
(PSOCA).

fundado y reconstituido
el día 4 de Abril del año 2009.

Se publica en dos formatos:
una versión digital que se
actualiza diariamente
(www.elsoca.org) y otra
versión impresa que se publica
quincenalmente.

Los artículos firmados no reflejan
necesariamente la opinión
editorial del **PSOCA**, sino la
exclusiva responsabilidad de sus
autores.



POR UN PROGRAMA UNITARIO DE LUCHA PARA SACAR AL GOBIERNO DE GIAMMATTEI

Por Armando Tezucún

La rabia e indignación acumulados por el pueblo guatemalteco contra el gobierno de Alejandro Giammattei explotaron con motivo de la ilegal destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval por parte de la jefa del Ministerio Público María Consuelo Porras. El resultado ha sido las más grandes movilizaciones en lo que va del año.

Desde el lunes 26 de julio, continuando el 29, 30 y 31, luego el 5, 6 y 9 de agosto, bajo la denominación de "paro nacional", miles de personas se congregaron en bloqueos de las carreteras principales carreteras del país, plantones y manifestaciones en las más importantes ciudades.

El llamado al paro nacional

Lo peculiar de estas jornadas de lucha es que han sido las organizaciones de los pueblos indígenas quienes han estado al frente convocando y organizando las protestas. La tónica de las convocatorias ha sido el llamado a todos los sectores de la población a unirse en una gesta democrática contra los corruptos. Tras la destitución de Sandoval, la organización de los 48 cantones de Totonicapán, que data del siglo XIX y representa a la población de la etnia quiché del departamento del mismo nombre, a través de su actual presidente Martín Toc, hizo un primer llamado a las acciones; "necesitamos de los transportistas, de quien trabaja en el campo, de las personas que están en el mercado, para que se manifiesten y que se escuche una sola voz pidiendo justicia, una sola voz pidiendo que este país se construya y es responsabilidad de todos...si tenemos que paralizar este país, lo haremos, porque ya no podemos seguir ante esta realidad...Es hora de decir que, el pueblo unido, jamás será vencido, estamos aquí nosotros en

pie de lucha, invitando a los ixiles, a los garífunas, a los xincas, ladinos de cualquier lugar de este país, hoy más que nunca, necesitamos la unidad de este pueblo" (La Hora 23/07/2021).

Desde el sábado 24 se unieron al llamado representantes de los pueblos maya, garífuna y xinca, a través de el Comité Campesino del Altiplano, el Parlamento Xinca, la Alcaldía Indígena de Palín, el Comité de Unidad Campesina, Waquib' Kej, las Autoridades Indígenas Ancestrales



de Ixmulew, la Municipalidad Indígena de Sololá (que representa a 83 comunidades) y otras organizaciones. Estas últimas autoridades indígenas declararon: "...ante la negativa y las últimas acciones de deslegitimar lo realizado por el licenciado Sandoval y ante la gravedad de la situación del país, este día nos hemos reunido las máximas autoridades de Sololá dando un ultimátum al presidente de la república y a la fiscal general de la república para que presenten la renuncia a sus cargos en los próximos días...Como pueblos originarios, manifestamos nuestra inconformidad a través del diálogo y al no ser escuchados tomaremos acciones para exigir los derechos de la población" (La Hora 26/07/2021).

El llamado de las organizaciones indígenas fue bastante amplio, multclasista, incluyendo no solo a

la población pobre, sino también a empresarios. Los representantes del Parlamento Xinca (una de las etnias originarias que existen en el país) anunciaron el día 26: "El próximo jueves 29 de julio vamos a cerrar el país, vamos a hacer un paro nacional en cada comunidad, en cada territorio en distintos puntos estratégicos porque como pueblo de Guatemala estamos indignados y ya no queremos seguir viviendo en un Estado represor...Hacemos un llamado a todos los guatemaltecos, a todo el pueblo, a los empresarios dignos, luchar por una Guatemala libre, una libertad de verdad, no como la independencia que no han dicho" (Prensa Libre 27/07/2021).

A la convocatoria de los pueblos originarios se sumaron estudiantes de las universidades Rafael Landívar y San Carlos, grupos de la llamada "sociedad civil", ongs de diversa índole, diputados de las bancadas de los partidos de izquierda reformista WINAQ, Semilla y URNG y dirigentes de varias centrales sindicales.

Las acciones del 29 de julio

Ese día, durante más de siete horas miles de personas manifestaron exigiendo la renuncia del presidente Giammattei y la fiscal general Porras. En la capital, dos grandes grupos de manifestantes se ubicaron, uno frente a la sede del Ministerio Público, y otro frente a la Casa Presidencial para luego trasladarse a la Plaza de la Constitución; otro grupo, principalmente de jóvenes y universitarios bloqueó durante horas una importante intersección de vías en el norte de la ciudad, otro piquete bloqueó la Avenida Petapa a la altura de una de las entradas a la Universidad de San Carlos y otro más el ingreso a la Universidad Landívar en la zona



15. En estos dos bloques confluyeron estudiantes de las universidades arriba mencionadas, grupos feministas, grupos religiosos de base, ongs, organizaciones sindicales, médicos de hospitales públicos y ciudadanos a título personal; enfermeras y médicos del Hospital Roosevelt expresaron su solidaridad con las movilizaciones desde sus puestos de trabajo.

En el interior, al menos 23 puntos en diversas carreteras fueron bloqueados por organizaciones indígenas y campesinas, en los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Sololá, Escuintla, Chimaltenango, Sacatepéquez, Izabal, Suchitepéquez, Retalhuleu, Santa Rosa, Zacapa, El Progreso, Chiquimula y Huehuetenango. Además, hubo manifestaciones en las ciudades de Quetzaltenango, Totonicapán, San Pedro Sacatepéquez, Santa Cruz del Quiché, San Marcos, Cobán y San Benito. Como es usual, hubo un cruce de amparos interpuestos ante la Corte de Constitucionalidad; dos de parte del Procurador de los Derechos Humanos y el partido Winaq para garantizar los derechos de los manifestantes, y uno de parte de la organización empresarial CACIF para garantizar el derecho de locomoción, la libertad de industria, comercio, trabajo, salud, etc.

El éxito de la convocatoria se expresó en el entusiasmo de los dirigentes; Martín Toc dijo en su discurso: "Hoy es un día de victoria para todos los pueblos. Es un día de unidad que nosotros hemos soñado, donde dejamos la diferencia entre los xincas, los ixiles, los garífunas, los mestizos y los mayas...Hoy hemos hecho historia, porque hemos reunido al país. La lucha apenas inicia y ustedes con el sacrificio que realizaron les puedo decir que ha valido la pena...pronto harán una historia más grande cuando gobierne este país" (Prensa Libre 30/07/2021).

El viernes 30 continuaron los bloqueos en al menos seis puntos carreteros. Las demandas campesinas empezaron a aflorar; en una concentración del departamento de Retalhuleu, uno de los líderes dijo: "Seguimos con nuestra lucha, estamos

conscientes que afectamos a una parte de la población, pero es necesario ya no callar más y hacernos escuchar... la cosecha de este año fue mala, perdimos la mayor parte de nuestros cultivos y seguimos esperando el subsidio que ofrece el gobierno, nos hemos endeudado, pagamos nuestros impuestos, nuestras comunidades han sido olvidadas" (Prensa Libre 30/07/2021). Y el sábado 31 la población descontenta de nuevo protestó en la Plaza de la Constitución de la ciudad capital.

Las protestas del 5 y 6 de agosto

Las acciones continuaron los días 5 y 6 de agosto, esta vez convocadas por la Autoridades Indígenas Ancestrales de Guatemala, para iniciar a las 6 de la mañana del día 6 hasta las 18 horas del viernes 7, denominándolo "Paro Plurinacional". "Hacemos el llamado a los pueblos, estudiantes, mujeres a sumarse, y no permitir que el mensaje que se dio la semana pasada solo quede en una acción más. Estamos apoyando la exigencia de tener otro Estado. La actual situación de los que ostentan el poder no va a facilitar los territorios, solo quieren que estemos callados. El llamado es a unir la fuerza", declararon los líderes indígenas (La Hora 408/2021); también denunciaron la celebración del bicentenario de la independencia como una mirada racista del Estado, que solo ha traído saqueo, despojo y esclavitud (Idem). Los grupos indígenas también solicitaron el establecimiento de un diálogo nacional (Prensa Libre 5/08/2021).

El jueves 5, indígenas, estudiantes universitarios y colectivos urbanos bloquearon por más de 5 horas una importante intersección de la capital, para luego dirigirse a la Plaza de la Constitución. En el interior al menos 10 puntos carreteros fueron boqueados por manifestantes. El viernes 6 se produjeron otros bloqueos en al menos cinco puntos; y en la Plaza de la Constitución ofrecieron una conferencia de prensa las Autoridades Ancestrales, el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Acción Colectiva y otros grupos urbanos. Ese día las

protestas fueron menos nutridas, pero Leocadio Juracán, del CCDA, anunció que las movilizaciones continuarán, "Vamos a seguir insistiendo hasta que renuncien estos altos funcionarios corruptos vinculados con las mafias" (Prensa Libre 6/08/2021). Lo mismo hicieron los líderes de los 48 Cantones de Totonicapán, la Asamblea Social y Popular y las Autoridades Ancestrales, llamando a la unidad para conseguir la "democracia en el país, paz social, y desarrollo para los pueblos" (La Hora 7/08/2021).

Las movilizaciones de CODECA

Coincidiendo con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y el Consejo del Pueblo Maya (CPO) hicieron un llamado a un "paro plurinacional" para el lunes 9 de agosto, para exigir la renuncia de Giammattei y la fiscal Porras. Los líderes indígenas y campesinos llamaron a la formación de un "gobierno provisional de transición que tenga como funciones principales, atender con efectividad la emergencia sanitaria del COVID y crear las condiciones logísticas para el proceso constituyente hacia el Estado Plurinacional" (comunicado CODECA/CPO agosto 2021). En conferencia de prensa llamaron a la conformación de un "gobierno transitorio que convoque a un proceso de asamblea constituyente, popular y plurinacional, para consensuar y redactar una nueva constitución que exprese la voluntad y aspiraciones de todos los pueblos y sectores del país" (Prensa Libre 9/08/2021).

Ese día 38 puntos fueron bloqueados en las carreteras por los manifestantes. Estudiantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos bloquearon durante horas la Calzada Raúl Aguilar Batres.

Los empresarios representados por las cámaras de Comercio, del Agro, de Industria, de Turismo y el CACIF protestaron por las acciones de los compañeros, denunciándolas como realizadas "por un pequeño grupo de personas no son ni manifestaciones



ni paros; son bloqueos ilegales que ponen en riesgo la subsistencia, el trabajo, la integridad, la salud y la vida de los guatemaltecos...Exigimos al Ministerio Público investigar, además, el financiamiento de estos bloqueos y sus posibles vínculos con partidos políticos o campañas electorales anticipadas" (Prensa Libre 9/08/2021).

La clase obrera, la gran ausente

Las actuales movilizaciones democráticas anticorrupción tienen un fuerte tinte multclasista; quienes están a la cabeza, las organizaciones indígenas, tienen una base de pequeña burguesía empobrecida: pequeños comerciantes, pequeños campesinos, artesanos. A diferencia de las protestas de 2015, que fueron predominantemente de la clase media urbana, esta vez ha sido la población pobre del país, representada por sus líderes indígenas y campesinos, la que se ha lanzado a protestar.

La excepción ha sido la clase trabajadora asalariada, a pesar de la presencia en las manifestaciones de los dirigentes de las grandes centrales sindicales, en especial del Movimiento Sindical y Popular Autónomo de Guatemala. Este es un síntoma de la debilidad de la clase obrera guatemalteca; sin experiencia de lucha, y gravemente afectada por el enorme desempleo existente, los sindicatos de trabajadores asalariados no tienen la fuerza suficiente para declarar la huelga y unirse a las protestas democráticas. Un fuerte movimiento huelguístico sería un golpe al corazón de la oligarquía explotadora que está detrás de los gobiernos corruptos. La dirigente estudiantil universitaria Laura Aguiar está equivocada al considerar que el bloqueo de calles en la capital puede "desestabilizar el statu que de las empresas" (La Hora 29/07/2021); es la clase obrera organizada la única que puede sacudir las entrañas del orden capitalista al parar la producción en las empresas.

Es responsabilidad de los

compañeros dirigentes de las centrales sindicales impulsar la participación obrera en la lucha, por medio de plantones relámpago fuera de las instalaciones, colocación de mantas alusivas a las protestas, declaración de asambleas permanentes, y múltiples recursos que pueden ir acrecentando el nivel de combatividad. El impulso de la participación de la clase trabajadora asalariada es crucial para garantizar que los procesos de cambios se profundicen cada vez más en beneficio de la población en general, pues no tiene pequeñas propiedades ni



pequeños negocios que defender.

Por un programa de lucha unitario

La actual lucha anticorrupción inevitablemente sacará a flote las demandas sociales más sentidas de la población, pudiendo generar una dinámica anti sistémica. Sin una clara orientación sobre quiénes son los verdaderos enemigos del pueblo, el movimiento puede caer en manos de grupos de la burguesía que se presenten como democráticos, a estilo del Consejo Nacional Empresarial. Los mismos dirigentes indígenas no tienen un pensamiento homogéneo, e incluso se puede vislumbrar en algunos un futuro giro a la derecha, como dejan ver las declaraciones de Martín Toc: "No vayan a esperar que no surja un efecto de populismo, que en las próximas elecciones se elija a una persona que tenga rabia y enojo y al final les vayan a despojar de sus empresas, sus bienes..." (La Hora 27/07/2021).

A diferencia de las protestas de 2015, las actuales movilizaciones se

están planteando transformaciones políticas más profundas que van más allá del cambio de gobernantes; todas las organizaciones están confluyendo en la demanda de una Asamblea Constituyente Plurinacional que haga transformaciones de fondo en el país. El movimiento indígena y campesino actualmente exhibe una variedad de posturas, que van desde la defensa de la pequeña propiedad expresada por Toc, hasta la clara propuesta del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) de la conformación de un gobierno transitorio que convoque a un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, luego de sacar al gobierno de Giammattei (convocatoria a un Paro Plurinacional, 8/08/2021).

Los llamados a la unidad son insistentes; CODECA y el Consejo del Pueblo Maya han convocado para el 16 de agosto a una reunión de articulación hacia un Estado Plurinacional. En este proceso unitario se debe elaborar un plan de lucha con las reivindicaciones

más sentidas de la población pobre, para aglutinar a la mayor cantidad de gente alrededor de una plataforma unitaria; estas reivindicaciones pueden ser: la transformación radical de los sistemas públicos de salud y educación, en primer lugar para enfrentar eficientemente la pandemia del Covid; incremento inmediato del salario mínimo de acuerdo al costo de las canastas básicas, unificándolo para todos los sectores de trabajadores; un plan de inversiones públicas en infraestructura para crear empleos decentes con la cobertura social de ley; creación de un seguro de desempleo, y una renta básica para la población más pobre; asistencia financiera y técnica para los pequeños propietarios agrícolas y pequeñas empresas. Otras demandas se pueden agregar en consenso de todas las organizaciones. Es vital la creación de organismos populares de base que fiscalicen todos los aspectos del manejo del gobierno, erradicando la corrupción y el manoseo de los recursos del Estado. ■

LIBERALES Y NASRALLA: COMPARSAS DE UN PROYECTO DE ULTRADERECHA

Por Frandav Lifú

El partido Liberal de Honduras fue el principal partícipe del golpe de estado de Honduras en el 2009, sin la aprobación del mismo hubiera sido imposible asestar el golpe al ex presidente Manuel Zelaya Rosales. Un Roberto Micheletti, que en ese entonces era presidente del Congreso Nacional y que asumió la presidencia de facto de la república bajo el nombre de "Sucesión presidencial", nunca imaginó el caro precio que le pasaría la historia y el repudio de las bases del liberalismo. Fueron pocos los miembros dirigentes del PLH que en ese entonces se pusieron del lado de Zelaya, o más aún; que condenaron el golpe cívico militar por ser anti democrático.

El terrible pecado de los "liberales" no fue solamente liderar el golpe, si no que también le entregaron el país completo al Partido Nacional, con un recibo en blanco para que hicieran lo que quisieran en 12 años que han pasado desde entonces y, sobre todo, fueron también creadores del engendro que hoy nos mal gobierna. Un matrimonio, que, al parecer, ya inició la auto destrucción completa de otrora "milicias eternamente jóvenes".

12 años siendo comparsas: Factura muy cara

No es secreto que, en los 7 meses del gobierno de facto de Micheletti, se desvió cantidades millonarias de dinero y que los principales dirigentes del PLH se beneficiaron, por eso, el PNH al solo asumir el poder con Porfirio Lobo Sosa a la cabeza no dudó un tan solo instante en saquear al país y exprimirlo a como de lugar. A cambio, el PL percibió migajas que le tiraban como si fueran animales callejeros, pero también acompañaron a los "nacionalistas" en la aprobación de todos los decretos que eliminaron

conquistas a los trabajadores y en aprobar las leyes que judicializaban la protesta pública, igual apoyaron la aprobación de las "Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)". El repudio del pueblo lo recibieron en el 2009, en que el partido Nacional les obsequió varias diputaciones para no dejar en evidencia el escandaloso abstencionismo del proceso electoral, nuevamente se repitió la historia en el 2013 y 2017 en que pasaron a ser la tercera fuerza política en el país. Las



consecuencias funestas ocasionadas por el "maridaje" con el PN han sido desastrosas, a tal grado que se encuentran pateando esperando que alguien les tire un salvavidas.

Fraccionamiento liberal sin cura alguna

En el 2017, el voto duro del partido Liberal le dio el gane al candidato Luis Zelaya, creyendo que este haría diferencia con el resto del sector golpista muy ligado a Micheletti, Carlos Flores, Mauricio Villeda y Elvin Santos, no obstante, muy rápido se diferenció con la base que repudia al represor gobierno de Juan Orlando Hernández, al negarse a formar parte de la alianza "LIBRE- Nasralla" que se realizó con los resultados y convulsión social ya conocida. De haber integrado la alianza el candidato Luis Zelaya en aquel año, a la dictadura se le hubiera complicado mucho superar la votación con el

fraude del "voto rural".

La complicidad del PLH con el PN también ha sido muy evidente en la elección de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General, que han manipulado la justicia como a ellos se les ha antojado. Luis Zelaya perdió las elecciones en marzo contra Yani Rosenthal por que la base liberal visualizó en la imagen del ex reo, un contrincante contra el PNH, cosa que Luis Zelaya solo ha demostrado del diente al labio. LZ sigue sin aceptar que perdió el proceso electoral interno de marzo, y ha declarado en reiteradas ocasiones que apoya a candidatos a diputaciones y a alcaldías pero que no lo hará con el candidato presidencial, aunque trata de ocultar a quien apoyará para el ejecutivo, deja entrever que se irá del lado de Nasralla, hecho que no quiso en el 2017. Si Micheletti casi desapareció

al PL del escenario de las elecciones de noviembre del 2009, Luis Zelaya y Yani Rosenthal tienen a los liberales al borde de pasar a ser un partido bisagra más.

Ni liberales ni Nasralla son opción para refundar al país

En noviembre hay dos puntos muy claros: Los que prefieren que siga la narco dictadura o los que desean terminar con la misma. La ultraderecha tiene su estrategia muy definida, así lo demuestra la corporación Televisión Internacional de Honduras (TSI) al impulsar la candidatura de Nasralla y darle espacio televisivo a Luis Zelaya para que eleve el perfil para un futuro plan estratégico, en las última semanas ha dicho reiteradamente que en Honduras deciden JOH, Carlos Flores y Manuel Zelaya Rosales. A pesar de todo lo que maquillen, el pueblo siempre les cobra muy cara la factura. ■



ALGUNOS PROBLEMAS SE AGUDIZARÁN CON EL RETORNO A CLASES

Por Carlos M. Licona

El día miércoles 28 de julio el gobierno, en cadena nacional, ha informado la autorización para que se retorne a clases semi presenciales a partir del mes de agosto, tanto en centros gubernamentales como en no gubernamentales. El régimen ha planteado de forma disfrazada, algunas condiciones para el retorno; que todo el personal esté vacunado con las dos dosis, medidas de bioseguridad, que la comunidad en conjunto debe decidirlo, que es en las zonas donde hay poco contagio, entre otras. Tal y como se acostumbra en este país, las tales condiciones serán una falacia y solamente las cumplirá el sector privado, en cambio, en el sector gubernamental, los jefes incapaces y que a la vez se creen dictadores, terminarán maniobrando y presionando a los docentes para que se presenten a los centros educativos en las modalidades ya establecidas.



La incapacidad del régimen

Si hay algo que ha quedado demostrado en esta pandemia, es que a la narco dictadura lo que menos le interesa es la educación, la mejor evidencia es que el magisterio es el sector que aún no se ha considerado para ser vacunado, en cambio, si han vacunado a los empleados del transporte, activistas del Partido Nacional, vendedores del mercado, empresa privada, y otros, mientras que a los maestros aún no se les toma en cuenta y ni siquiera dan fechas para iniciar las vacunas.

El régimen da cifras que solo la mente de ellos es capaz de procesar, por ejemplo; el afirmar que más de 20,000 docentes ya están vacunados, una mentira ridícula por que, hasta ahora, las personas que se han

vacunado han sido por que han ido a los lugares establecidos para todas las personas según el rango de edad y según los requerimientos que van estableciendo, pero que no pueden determinar los que son docentes. Otro dato que solo en los documentos de las

autoridades incapaces existe, es el del protocolo de medidas de bioseguridad, por que, hasta ahora, el régimen solo se ha caracterizado por saquear el país en todas las secretarías del estado y en educación lo que han invertido ha sido para justificar lo mismo que se roban. Quizás, uno de los motivos para que se anuncie el retorno a clases en forma semi presencial es el desviar fondos con la justificación de que han comprado implementos para los centros educativos.

Educación privada le tuerce el brazo a SINAGER

Hasta ahora, desde que inició la pandemia, el régimen descuidó totalmente la educación pública, sin embargo, ahora, con la presión de los centros educativos no gubernamentales (privados) y principalmente de las universidades, por arte de magia el régimen anuncia el retorno a clases. No se duda que en los centros privados ya cumplen con el protocolo exigido y su personal y alumnado ya están vacunados, no obstante, la educación pública es otra realidad.

En conclusión, el régimen se la juega a la ruleta rusa al permitir que se retorne a clases y que se mueran

los que se tienen que morir. La incapacidad del régimen es manifiesta en funcionarios que no conocen la realidad de la educación hondureña, y que el retorno solamente acelerará el número de contagios y que obviamente culminará con un sistema de salud colapsado y muchos docentes y madres de familia engrosando las estadísticas de muertos por COVID, pero, además, con centros educativos como focos de contagio se vislumbra una mayor crisis política previo y post elecciones del 28 de noviembre.

La ambición económica de los dueños de las instituciones privadas se ha impuesto a las autoridades educativas y es seguro que retornarán a clases a inicios de agosto, en cambio, a las instituciones públicas se les está lanzando a una guerra donde se avizora una muerte sin retorno, profundizando la ya existente crisis política que vive el país.

Los educandos y la calidad educativa: otra falacia más del régimen

Una justificación del régimen para que los muchachos vuelvan a las aulas es la calidad de educación que están recibiendo, sin embargo, hay un abismo de diferencia entre la educación privada y la pública desde hace varias décadas, brecha que se ha incrementado en los últimos 12 años.

Para el retorno a las aulas de clase, es obligación que se vacune a los maestros, madres, padres de familia y educandos. Es obligación que se otorguen los implementos para mantener las medidas de bioseguridad en tiempo y forma, pero, además. Hasta ahora, el régimen con la apertura de los centros educativos está evadiendo la obligación de dar internet gratis y entregar herramientas tecnológicas a los alumnos. Pero también se lava la cara ante la exigencia de los cooperantes externos. ■



IGUAL QUE LOS GOBIERNOS ANTERIORES, BUKELE RESPONDE CON LA MILITARIZACIÓN

Por German Aquino

Con los Acuerdos de Paz de 1992 entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno de la ultraderecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), se puso fin a la confrontación armada, logrando a la vez la reducción del número de efectivos de las Fuerzas Armadas, eliminar los reclutamiento forzosos de los cuales era la juventud la más afectada, estableciéndose también que el objetivo de esta sería "la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio, es una institución permanente al servicio de la nación; es obediente, profesional, apolítica y no deliberante". Con ello las fuerzas armadas fueron encuarteladas y no tendrían participación en materia de seguridad pública, creándose para tal finalidad la Policía Nacional Civil (PNC), que tendría como misión "... proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, la de prevenir y combatir toda clase de delitos, así como la de mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como en el rural...". En sus inicios fue integrada por un 20% de elementos de los cuerpos de seguridad del estado, otro 20% del FMLN y un 60% de personas que no pertenecieran a ninguno de los bandos, así mismo estaría bajo la dirección de civiles, conforme han pasado los años la dirección ha sido militarizada lo que la ha llevado a una desnaturalización.

Frágil democracia burguesa y agudización de la pobreza

Ademas de no consolidarse la incipiente democracia surgida con los Acuerdos de Paz, estos no dieron solución a problemas estructurales históricos como la pobreza, falta de empleos y salarios dignos,

sobreexplotación, vivienda, tenencia de la tierra, falta de educación, Etc. contrario a ello los gobiernos de ARENA iniciaron la privatización de servicios y activos del Estado. Desde los gobiernos de ARENA hasta los del FMLN buscaron tapar con programas asistencialistas las causas estructurales que generaron el pasado conflicto armado. Los cuales conforme ha pasado el tiempo se han ido agudizando, lo que ha conllevado a un aumento de la delincuencia, violencia y de la migración. Ante la falta de un referente de izquierda han sido las maras y pandillas las que lograron



canalizar dicho descontento, siendo estas últimamente instrumentalizadas por los mismos partidos políticos con fines electorales. La pandemia por el COVID-19 vino a agudizar más los problemas de desempleo, salarios dignos, etc. el actual gobierno no parece estar dispuesto a dar verdaderas soluciones también ha recurrido a planes asistencialistas como el paquete alimentarios, entre de \$300.00 Etc.

Los gobiernos anteriores en lugar de dar solución real a las causas que llevan a la juventud a delinquir, se dedicaron a atacar los efectos ejecutando planes represivos de seguridad en los cuales conforme fue pasando el tiempo incorporaron a efectivos de las fuerzas armadas en labores de seguridad, lo

anterior era contrario a lo establecido en los Acuerdos de Paz y la Constitución de El Salvador.

Mientras el FMLN fue oposición desde la Asamblea Legislativa criticaron la medida y con justa razón pues conocían la amenazas que ello representa, pero una vez en el Ejecutivo contrario a lo que se hubiese esperado en lugar de encuartelar a las fuerzas armadas terminaron aumentando el número de efectivos en labores de seguridad pública. El gobierno de Bukele no es la excepción con su plan de seguridad control territorial, en el lanzamiento de su fase IV ha abierto completamente las puertas de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad desplazando en los hechos a la PNC, planteándose también aumentar de 20,000 a 40,000 el numero de efectivos.

Fase IV: pobres contra pobres

En el discurso de lanzamiento de la fase IV el presidente manifestó: "Habrà una persona brindando seguridad por cada pandillero. Así vamos a ganar esta guerra con las pandillas, con medidas valientes". Al no atacar las causas que generan la violencia y la delincuencia todos los planes de seguridad implementados han sido un fracaso, solo han servido mediáticamente a los gobernantes de turno. Desde que iniciaron con los planes represivos de seguridad el número de homicidios ha aumentado, para el 2020 año de la pandemia por el COVID-19 a pesar de la cuarentena El Salvador tuvo una tasa de 20 muertes por cada 100.000 habitantes. Es de recordar que durante el gobierno del FMLN hubo una reducción de los homicidios lo cual fue



atribuido a una posible tregua, pero luego nuevamente se dio un repunte de los homicidios. Similar a sucedido en lo que va del año se ha tenido un repunte de homicidios y personas reportadas como desaparecidas las cuales al final podrían ser traducidos como muerte.

El actual gobierno al igual como el de Funes en su momento plantea como un gran logro la reducción de homicidios, lo anterior parece desvanecerse a pocos meses de su gestión, conduciéndole a un leve pero continuo desgaste de la gran popularidad que goza la cual podría caérsele de no resolver los problemas de la violencia y la delincuencia: los problemas de los cuales el pueblo salvadoreño demanda una pronta solución. Es por ello que al final el actual gobierno al igual que los anteriores ha militarizado a El Salvador lo cual además de generar un efecto mediático favorable en la población, le es útil para su proyecto político bonapartista.

El actual gobierno con su plan de seguridad no acabara con la violencia y la delincuencia, pero si fortalece el aparato represivo del Estado, para luego usarlo en el momento que los pobres y la clase trabajadora tome conciencia y mediante la organización y lucha sindical y popular exija sus derechos, así mismo lo usara contra toda oposición política.

Fortalecimiento del aparato militar

En el 2020 el presupuesto asignado al ramo de la defensa nacional fue 224,044,174, para el 2021 los Diputados de la anterior legislatura, del proyecto de presupuesto solo aprobaron 220,000,959. Haciéndole un recorte aproximado de \$27.9 millones de dólares. Pero una vez tomo posesión la nueva Asamblea Legislativa le han sido aprobados refuerzo presupuestario como los \$38 millones de dólares solicitados en el mes de julio por el Ministro de la defensa quien considera que dichos refuerzos son necesarios

para "...la sostenibilidad del Plan Control Territorial... la modernización de la Institución, más equipo, más tecnología...A lo anterior se suma que la Fuerza Armada debe aumentar las capacidades con equipo como aeronaves, embarcaciones, botas y armamento..." (<https://www.asamblea.gob.sv>)

Parte del presupuesto asignado a la defensa es financiado vía prestamos, como ejemplo los \$109 millones, que provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), de los cuales tienen previsto usar 50 millones para la compra de equipos, armas, municiones, etc.

El actual gobierno a través de sus Diputados además de modernizar las

ello que el Ministro de Defensa también ha planteado ya la hacer reformas a la Ley Orgánica de La Fuerza Armada, Ley de la carrera Militar, Ley de Control y Regulación de Armas, Código de Justicia Militar, Ley de Régimen Disciplinario de la FAES y Ley del IPSFA.

El servicio militar no es un empleo

En el lanzamiento de la fase IV del Plan Control Territorial manifestó "...Con esta Fase del Plan Control Territorial nos garantizará tener suficiente capital humano para poder vencer a las pandillas en sus territorios. Son 20,000 nuevos empleos para jóvenes honrados, leales, con amor a su patria, este es el tipo de jóvenes que queremos en nuestro país. Gente con ganas de trabajar y luchar por nuestro país...". El gobierno presenta el servicio militar como una respuesta a la falta de un empleo y salario para la juventud.

Que se combatan las causas y no los efectos

Es urgente que el gobierno actual resuelva los problemas de violencia y delincuencia, pero no mediante planes represivos, los cuales ya demostraron ser ineficaces, en lugar de continuar invirtiendo los

fondos en las fuerzas armadas se debe exigir que estos se destinen a crear más empleos, salarios dignos y mejores condiciones laborales, así como también condiciones que garanticen la educación gratuita y de calidad en todos los niveles, que todos los jóvenes terminen su bachillerato y que se les garantice el acceso a la educación superior.

Es necesario evitar que se consolide el militarismo en El Salvador, sabemos lo nocivo que esto ha sido para el pueblo salvadoreño, se debe recordar las masacres cometidas por la fuerza armada. Por cual debemos exigir que se investigue y castigue a todos los altos mandos de las fuerzas armadas responsables de los delitos cometidos en contra el pueblo salvadoreño. ■



fuerzas armadas con el pretexto de combate a la violencia y delincuencia, también busca congraciarse con el Estado mayor de la fuerzas armadas es por ello que busca mejorar "...las capacidades médicas hospitalarias, sistema previsional y mejoramiento de la infraestructura de las unidades militares..." (<https://www.asamblea.gob.sv>). En ese marco tiene proyectado mejorar los hospitales militares, los cuales en la mayoría de casos son solo para militares, de esta forma busca garantizar a los militares una atención médica hospitalaria, así mismo plantean mejorar el sistema previsional de la casta Militar, mientras la clase trabajadora le toca sobrevivir con pensiones miserables.

Los militares también busca adaptar su normativa jurídica a esta nueva etapa del autoritarismo es por



PANDEMIA COVID-19: EL MACABRO JUEGO Y LOS JUGOSOS CONTRATOS DE LAS FARMACÉUTICAS

Por *Nicolas Lebrun*

A principios del mes, las grandes compañías de biotecnología, productoras de dos de las vacunas que utilizan el innovador descubrimiento de la tecnología del ARN mensajero, Moderna y Pfizer, han vuelto a mostrar el macabro rostro del negocio ligado a la producción y distribución de las vacunas contra el Covid 19.

“Los precios de las vacunas contra la covid-19 se han elevado hasta un 25% en la segunda ronda de contratos de reserva firmados por la Comisión Europea. Las dosis elaboradas por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech han pasado de 15 euros a 19,50, mientras que las de Moderna, de 19 a 21 euros. Ambos productos utilizan la tecnología del ARN mensajero que se ha impuesto en la Unión Europea como la principal referencia frente a otras vacunas, como la de AstraZeneca (que se vende a precio de coste, unos dos euros, pero ya descartada para el futuro por Bruselas) o la de Janssen (8,4 euros). El incremento coincide con el debate sobre la necesidad o no de inyectar dosis de recuerdo a las personas que han completado la pauta de vacunación durante la campaña de este año.

El nuevo precio de la vacuna de BioNTech/Pfizer había trascendido el pasado abril, poco antes de que la Comisión cerrase un acuerdo con ambas empresas para la adquisición de 1.800 millones de dosis entre 2021 y 2023. La factura de 19,50 euros por dosis ha sido corroborada este domingo por el diario británico Financial Times, que asegura haber tenido acceso a partes del contrato entre la Comisión y las dos farmacéuticas. La subida supone un 25% en relación con los primeros contratos, que llevaron a la adquisición de 700 millones de dosis.

El mismo diario asegura que Moderna también ha elevado sus precios

casi un 10%, pero el suministro hacia la UE de esa compañía estadounidense es muy inferior al de la alemana BioNTech y la estadounidense Pfizer. En un primer contrato con Moderna, Bruselas reservó 160 millones de dosis. Y otros 300 millones en un segundo contrato, con entrega prevista hasta 2022.” (El País, 5 de agosto del 2021)

Esto no es ni más ni menos que un plan concebido para lucrar a fondo con la necesidad vital de millares de seres humanos que están todavía a la espera



de las dos dosis de estas vacunas, que hasta la fecha y con los datos que se poseen hoy en día, son las que mejor protección dan contra el mortal virus.

Negocio opaco y redondo bajo el manto de protección de la UE y los E.E.U.U

Los jefes de las diferentes instituciones europeas no dejan de machacar en cada oportunidad que representan los “valores europeos” lo que, según ellos, los hace diferentes a otros países que según su vara de medida, se salen de los marcos democráticos o del libre comercio.

Pero este discurso no es más que la demagogia que acompaña los más bajos intereses de las potencias imperialistas europeas, que durante siglos han saqueado y siguen hasta hoy en día, los recursos naturales, mano de obra y otros bienes de las antiguas colonias y

países del denominado Tercer Mundo. Este saqueo no solo se ha dado durante el periodo colonial, donde a sangre y a fuego, ejercieron el dominio sobre los pueblos autóctonos para permitirles la extracción de enormes recursos que les permitieron entre otras cosas dar el salto hacia la industrialización de las metrópolis. Hoy en día, a pesar de los procesos de independencia que se dieron en la mayoría de sus antiguas colonias y también de las guerras de rapiña entre las potencias imperialistas, los gobiernos existentes, en casi la totalidad, no son más que socios menores de estas potencias. La UE y sus miembros no dudan en hacer pactos con dictaduras militares y cierran los ojos cuando estas someten a sus pueblos a los peores vejámenes.

La lógica del negocio de las vacunas va por el mismo camino. Con esta protección contra el virus del SARS covid 2, las potencias europeas piensan ganar un pulso comercial contra los otros países imperialistas. No en balde, la lluvia de subsidios públicos que se les ha otorgado a estas empresas ha sido enormes. Las negociaciones de los contratos de producción y venta de las vacunas en el seno de la UE han sido declarados secretas y ni siquiera los diputados del parlamento europeo han recibido la totalidad de los documentos de estas transacciones.

“Desde que comenzó la pandemia, las vacunas contra el coronavirus han recibido una suma de casi 5.000 millones de euros de fondos públicos y de organizaciones filantrópicas solo para su investigación y desarrollo. La cifra, que no tiene en cuenta los acuerdos de compra, viene recogida en un informe publicado este jueves por la alianza de organizaciones “No es Sano”, que hace hincapié en la “enorme inversión pública” que los gobiernos han destinado a apoyar a



las grandes empresas que están detrás de las principales vacunas que se han desarrollado contra el coronavirus.

No obstante, denuncian que esta inversión "se ha dejado en manos" del sector farmacéutico "sin condiciones y sin asegurar" el acceso universal ni precios justos para todos los países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en la actualidad más del 75% de todas las vacunas administradas se concentran en solo 10 países. "El acaparamiento por parte de unos pocos, acompañado de una capacidad de producción limitada, nos ha llevado al escenario actual en el que muchos países no alcanzarán un buen ritmo de vacunación hasta 2023".

"En verano de 2020 empezamos la carrera a contrarreloj que puso a la cola a los países más pobres. ¿Quiénes han sido los países que han podido negociar y asegurar vacunas? Los países ricos con capacidad de compra", ha dicho durante la presentación del documento Irene Bernal, investigadora de Salud por Derecho, una de las organizaciones que forman parte de No es Sano, compuesta por ONG, colegios profesionales y asociaciones que defienden el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos a un precio asequible." (El Diario.es 27/05/2021)

Las otras potencias imperialistas no han hecho que seguir la misma línea que sus pares europeos.

"Según el portal del Global Health Centre de Ginebra, Suiza, Janssen, la filial encargada de la vacuna monodosis de Johnson & Johnson, recibió 1.028 millones de dólares (843 millones de euros) de EEUU al igual que Moderna, a la que el país norteamericano destinó alrededor de 955 millones de dólares (783 millones de euros), y también percibió fondos de CEPI y la cantante Dolly Parton. Mientras, Pfizer/ BioNTech fueron receptoras de aproximadamente 800 millones de dólares (656 millones de euros) en I+D de Alemania, la UE y Singapur.

A la compañía germana Curevac –cuya vacuna se encuentra en la fase de desarrollo clínico– Alemania, la UE y CEPI le han destinado unos 742 millones de dólares (608 millones de euros). Le sigue la compañía estadounidense Novavax, que recibió 508 millones de dólares (417 millones de euros) en financiación tanto de EEUU, CEPI (la

mayoría) y procedentes de la filantropía (la Fundación Gates).

A ellas se suma el caso de la empresa china Sinopharm, que fue destinataria de 145 millones de dólares (119 millones de euros) del gigante asiático, según los datos del Global Health Centre, que reflejan también que la asociación AstraZeneca/Oxford tienen entre sus grandes financiadores a Reino Unido y CEPI, así como a la organización benéfica británica Wellcome Trust, los cuales aportaron cerca de 118 millones de dólares (97 millones de euros). En la lista de receptores de fondos públicos hay otros desarrolladores de vacunas avanzadas como la canadiense Medicago." (ídem)

Como se ve con estos datos, el objetivo es el máximo lucro y de cumplir objetivos geopolíticos con la estrategia global de vacunación sin importar las necesidades de las masas a nivel mundial. Bajo el capitalismo y en esta etapa de reacción neoliberal que nos somete desde hace cuarenta años, la salud no es más que una mercancía y un negocio. La salud y el acceso a los servicios se convierte cada vez en un lujo para una minoría de los habitantes del planeta.

Aumento de las desigualdades y la cuarta ola

El aumento de los precios, aunado a las dificultades creadas por las empresas para presionar hacia el alza de estos, se han creado las condiciones para que solo una parte minoritaria de los habitantes del planeta tengan la posibilidad de tener un esquema de vacunación completo.

"El mundo está embarcado en un proceso de vacunación sin precedentes para frenar el coronavirus. Este camino hacia la inmunidad global avanza de manera desigual según la región. Mientras que en Europa ya se han vacunado con al menos una dosis a más de 88 personas de cada 100 habitantes, en Oceanía sólo 38 personas de cada 100 han sido vacunadas.

La brecha del proceso de vacunación entre los países más ricos y más pobres sigue aumentando por lo que peligra el objetivo de conseguir una inmunidad global. Según los datos de Our World in Data, en el continente africano sólo 5,5 personas de cada 100 ha recibido al menos una dosis contra el coronavirus." (El Mundo, 6 de agosto

del 2021)

A escala de países, la situación se vuelve más dramática aún. Según Our World Data, a la fecha del 6 de agosto del presente año, en Guatemala habían sido vacunadas completamente 1,99/100 habitantes; En Honduras el 3,16/100; El Salvador lidera el área con 25,13/100, seguido por Costa Rica con 16,71/100; Panamá con 16,48/100 y Nicaragua con solo 2,46/100 habitantes.

Con esta tendencia, la posibilidad real es que se disparen el número de contagios debido a la aparición de nuevas variantes que son el resultado del abandono y mala gestión de la crisis por las autoridades políticas y de salud en las diferentes escalas: nacionales, regionales y mundiales. Cada día que pasa en el cual la vacunación se hace imprescindible para frenar el avance del virus y las atroces consecuencias que no solo conllevan a la muerte de miles de personas, si no que también arrastra consecuencias físicas y mentales para aquellos que logran superarla.

Por la eliminación de las patentes

Diferentes movimientos políticos y sindicales se han manifestado ya por el levantamiento de las patentes y por la producción en diferentes sitios de las vacunas.

Los argumentos de las grandes empresas y de los que los protegen son si no mas que ridículos. Cuando, para lograr llenar el bolsillo de los accionistas de estas empresas farmacéuticas, no dudan ni un momento relocalizar sus sitios de producción en cualquiera de los cuatro rincones del planeta, ahora defienden el "savoir faire" en sus plantas en los países imperialistas. En el Parlamento Europeo una moción en ese sentido fue rechazada por la mayoría de los miembros de los bloques de partidos liberales y socialdemócratas. Más claro no canta un gallo.

EL movimiento sindical y popular debe imponer por medio de la movilización la eliminación de estas patentes de la muerte.

Esta lógica esquizofrénica apunta también contra los habitantes de los países imperialistas que confusamente pueden sentirse seguros en sus rediles, completamente vacunados. Mientras la inmunidad no sea conseguida por la mayor parte de la población del globo, las consecuencias a mediano y a largo plazo pueden ser imprevisibles. ■

EL CENTENARIO DE FUNDACIÓN DEL PCCH. (SEGUNDA PARTE)

Por Oliverio Mejía

Con el asesinato de la vanguardia obrera y de muchos militantes del Partido Comunista Chino (PCCH) por parte de la dirección del Kuomintang (KMT), Chiang Kai-shek también ajustó cuentas con el ala izquierda de su partido, el cual venía fortaleciéndose por las campañas al norte y al sur contra los señores de la guerra. Chiang ordenó el cierre de la Unión General de Trabajadores controlada por el PCCH.

Los intentos de soviétización

En tanto, el PCCH, golpeado por estas acciones, ordenó una ofensiva sobre Shanghái, Nanchang, Guangzhou, Hunan y otras ciudades, lanzando una insurrección con poco apoyo de la clase trabajadora, a estas alturas desmoralizada por la represión del KMT, pero que, sin embargo, logró conquistar posiciones estratégicas y declaró comunas y soviets en distintas ciudades.

En las provincias rurales, se generan una serie de levantamientos contra los terratenientes, conocidos como la Insurrección de la Cosecha de Otoño, en las provincias de Kiangsi y Hunan, los cuales no tienen éxito; sin embargo, en ciudades como Linfeng y Haifeng, se afianza la base del PCCH y logra celebrarse el Primer Congreso de Soviets, creando un gobierno soviético conformado por representantes de las provincias de Nanchang, Changsha, Shantou y Cantón. Mientras tanto, el KMT se desgastaba en batallas contra los señores de guerra restantes, en la llamada Guerra de las Planicies.

Pese a la derrota de estos intentos insurreccionales, instigados por la orientación estalinista del giro ultraizquierdista de finales de los años veinte, el PCCH resistió y estableció el denominado Soviet de Jiangxi y Fujian

al sur de China, de 1931 a 1933. Se conformó una república reconocida por la URSS, que expropió a algunos terratenientes, creándose además el Ejército Rojo; y es en ese momento donde empieza a despuntar la figura de Mao Zedong, aunque la dirección del PCCH estuviera controlada por los denominados 28 militantes dirigidos por Wang Ming y Bo Gu, en su mayoría



cuadros formados por Moscú y más cercanos a Stalin.

El gobierno de la China Nacionalista, cuya capital se encontraba en Nankín, una vez derrotados los señores de la guerra y unido con algunos de éstos, lanzó cinco campañas militares entre el año 31 y el 33 contra el PCCH, cuatro derrotadas por el Ejército Rojo, sobresaliendo la capacidad militar de Mao. Sin embargo, en la quinta campaña Chang Kai-Shek, con asesoría militar alemana, logra desalojar a los comunistas de la provincia Jiangxi, iniciando lo que se llama la Larga Marcha.

Esta fue una gran huida hacia el norte, ante el cerco militar nacionalista, logrando establecerse en la ciudad de Yan'an, región más inhóspita y con menor población. Durante ese momento, la dirigencia histórica del PCCH es purgada por elementos estalinistas; Chen se adhiere a la Oposición de Izquierda y es perseguido. Esta república soviética,

pese a su resistencia por tres años, es débil, debido a que estaba de espaldas a los núcleos urbanos, donde el PCCH prácticamente no tenía bases.

En 1935 se produce la Reunión de Zunyi en plena Larga Marcha. Mao había sido apartado de los cargos de dirección que fue asumiendo desde 1931, al grado de ser arrestado, pero por presión del Comintern, este asume nuevamente un cargo en el Comité Central, aunque sería hasta 1945 cuando logra el control total.

La política impulsada por Mao era una táctica esencialmente defensiva, válida y ajustada a las circunstancias, tras la masacre de obreros de Shanghái y Cantón, ya que los sobrevivientes no tuvieron otra alternativa que huir hacia las zonas rurales donde había millones de campesinos pobres. Ahí comenzaron a reconstruir el Partido Comunista y a construir una organización armada.

Excluida y perseguida la tendencia Chen y su orientación proletaria y socialista, predominaba en el partido una tendencia menchevique (la de los 28 militantes), que defendía la tesis estalinista de las dos etapas de la revolución -la burguesa y la socialista- y la de Mao. Éste, pese a no diferenciarse abismalmente de los estalinistas, consideraba que el Frente Único Antiimperialista era posible con el KMT -recordemos que Japón había invadido Manchuria desde 1931- pero manteniendo la absoluta independencia organizativa del PCCH.

El giro campesinista

El sentimiento antiimperialista por medio de la lucha de liberación nacional ante la invasión japonesa, más la experiencia en la República Soviética de haber realizado una reforma agraria parcial y la creación del Ejército Rojo, junto al impacto de la Larga Marcha, visualizó al campesinado como la fuerza



motriz estratégica de la revolución, lo cual era entendible en la estructura social china, pero a costa de relegar de tal ubicación al proletariado.

Esto tendrá consecuencias importantes en la burocratización del partido, en la naturaleza de la revolución china que anotaremos un poco más adelante. En ese momento, Mao hizo de la necesidad una virtud y transformó una táctica en una teoría y estrategia, donde la base social fue el campesinado y el método de lucha, la guerra popular prolongada.

En este sentido, la Oposición de Izquierda China, en su Informe al III Congreso de la IV Internacional, considera que el PCCH es "un partido pequeño burgués basado en el campesinado, convirtiéndose de partido obrero a partido campesino". Esto sucedió después de la derrota de la segunda revolución, cuando se abandonó el movimiento obrero urbano y se giró enteramente hacia el campo, organizando guerrillas en las aldeas y absorbiendo a un importante número de campesinos.

De tal forma que el PCCH se vuelve un partido-ejército, donde la guerra reemplaza a los métodos de la lucha política de masas y el régimen interno pasa de ser centralizado democráticamente a ser dominado por mecanismos de la disciplina militar. Esto provocó que los cuadros dirigentes -provenientes de una intelligentsia pequeño burguesa- se desclasaran, centrando su accionar en decisiones militares, aunque también relacionadas con la vida en el entorno campesino.

Tal situación generó la posibilidad de movilizar masas inmensas, pero al mismo tiempo fue derivando en gestiones clientelares, sobre todo en aspectos relacionados a la producción agrícola; de tal forma que fue cobrando forma una burocracia persistente y autónoma. La otra cara de esto fue la organización de levantamientos campesinos aislados, sin lograr un levantamiento masivo, situación provocada por la naturaleza fragmentada del campo chino; esta táctica se pudo aplicar solamente en las regiones donde las fuerzas militares enemigas eran débiles.

A finales de la década de los treinta, el régimen del KMT estaba en decadencia y era odiado por las masas chinas, mostrando la bancarrota del capitalismo neocolonial. En ese contexto se realizaron una serie de huelgas obreras. La orientación del PCCH y de Mao fue que éstas esperaran el advenimiento del Ejército Rojo y su base campesina; sin embargo, los hechos se fueron precipitando debido al inicio de la guerra sino-japonesa.

La Guerra sino-japonesa (1937-1945)

Como preludeo de la II Guerra Mundial, las tropas niponas que ocupaban Manchuria estableciendo allí un Estado títere de Tokio, avanzaron hacia el sur, conquistando la mayor parte del territorio chino, entrando en Nankín (realizando una masacre contra la población civil) y obligando a la República China controlada por el KMT a rendirse. El KMT traslada su capital primero a Wuhan, que también cae, y luego a Chongqing. Japón logró conquistar las principales ciudades costeras chinas, pero los comunistas se atrincheraron en la provincia de Shaanxi, creando allí el Soviet de Yanan.

Recién en 1941, con la entrada de Estados Unidos y la URSS a la segunda guerra, después de darle largas al pedido de apoyo de la República China, la cual primero cayó ante Japón, ambos países inician el apertrechamiento, tanto del bando nacionalista del KMT como del PCCH. Al final, gracias a la ayuda recibida, la resistencia del KMT, refugiado en el sur-oeste, junto a la resistencia comunista en el noroeste, obligó a Japón a consolidar a partir de 1940 las regiones ocupadas, que si bien eran las más ricas (desde el norte hacia el sur y la parte costera), pero ya no pudo desalojar a los chinos de las otras.

El PCCH, por su parte, reorganiza la resistencia anti-nipona usando la táctica de guerra de guerrillas, mientras que en el plano político se estableció con el KMT un frente unido antiimperialista. Sobre eso existe una polémica, pues si bien era válido tal frente y se encuentra en los lineamientos de las Tesis de Oriente de la III Internacional de 1922,

al grado que, a diferencia de finales de los años 20, el PCCH no se disolvió dentro del KMT. La orientación maoísta fue frenar la energía campesina por la reforma agraria por medio de sus acuerdos y su política de convivencia con sectores de la burguesía, situación que cambió hasta 1947.

Nahuel Moreno calificó los Soviets de Yunnan como un Estado plebeyo popular, basado en una economía agrícola independiente del imperialismo y ligado al estalinismo, manteniendo cierta influencia de terratenientes y campesinos ricos; el PCCH, por su parte, actuó de forma bonapartista entre las masas y los conflictos con distintas clases. Las necesidades de la guerra obligaron a que se fortaleciera la producción agraria por medio de cooperativas que la hicieron incrementar, sin tocar los intereses de las clases altas agrarias, de tal forma que se fue concibiendo la nueva democracia o alianza de las cuatro clases (obreros, campesinos, pequeña burguesía y burguesía nacional), una república burguesa donde el triunfo comunista mantuviera las relaciones de propiedad capitalista.

El pueblo chino sufrió atrocidades de parte del ejército nipón, pero recién cuando Japón empezó a perder los territorios ocupados en el Pacífico a manos de Estados Unidos, desde el sur a través de Birmania, tropas estadounidenses y británicas iniciaron en 1944 una ofensiva contra los territorios chinos ocupados por Tokio. Por su parte, el ejército nacionalista y el Ejército Rojo aprovecharon para ir debilitando desde distintos flancos a Japón y en 1945, con la guerra en Europa terminada, los soviéticos invaden Manchuria para terminar de debilitar a Japón.

La tercera revolución china

Con la derrota nipona quedó una tensa calma entre el KMT y el PCCH. Recordemos que a nivel global, como parte de los acuerdos de Yalta, el imperialismo y el estalinismo se repartieron en esferas de influencia regiones del mundo y la política seguida por el segundo consistió en procurar

acuerdos con fuerzas burguesas, siguiendo la línea frente-populista, pero la constante agresión gringa hizo cambiar eso en 1947.

El KMT, por su parte, traicionando acuerdos con el PCCH, no quiso conformar una Asamblea Constituyente, ni la unificación de las fuerzas armadas entre ambos ejércitos. Es después de 1947 que, ante la presión de los campesinos de los territorios ocupados, Mao ordena la realización de una reforma agraria en estas regiones y la confiscación de tierras a terratenientes y campesinos ricos.

Se generó otra guerra entre ambos bandos, que culminaría con la derrota de Chiang Kai-Shek en 1949, y su huida a la isla Taiwán. Esta tercera revolución sin duda fue una insurrección de base campesina que expropió a la burguesía rural y en este proceso el PCCH, funcionado como partido sustitucionista no obrero, involucró de forma burocrática a la clase obrera cuando ya había triunfado. Esta revolución llevó a la autodeterminación campesina, pero bajo el control del PCCH, sin que eso significara que el campesinado tomara el poder.

Mao consideraba que la etapa burguesa de la revolución duraría muchos años. No obstante, en menos de un año, el PCCH enfrentó la amenaza de un ataque militar del imperialismo estadounidense tras la guerra de Corea, territorio ocupado por Japón desde 1911 y que, tras la derrota de este, quedó dividido en dos, una parte ocupada por los comunistas y otra por los nacionalistas de derecha. Esto obligó a Mao a expropiar a la gran burguesía urbana, que inició un proceso de sabotaje interno.

La Guerra de Liberación Nacional y la expropiación de la burguesía llevó al movimiento revolucionario a eliminar muchos factores sociales y culturales retrógrados de la sociedad china, incluyendo la poligamia, los compromisos matrimoniales infantiles, el vendado de pies y el concubinato. El analfabetismo fue en gran medida abolido y la esperanza de vida aumentó

significativamente.

Sin embargo, como en otras revoluciones llevadas a cabo por partidos comunistas burocratizados, cualquier intento independiente de organización de los obreros fue reprimido, algunos con presencia de trotskistas chinos, los cuales fueron arrestados junto a sus familias entre finales del 52 e inicios del 53. El rol del PCCH en la revolución china fue entonces, dirigir una revolución agraria auténtica, posiblemente la mayor de la historia, pero bloqueada respecto de una verdadera dinámica socialista.

Uno de los grandes logros de la revolución socialista china fue la economía planificada centralmente, la cual dio importantes frutos, como haber acabado con el hambre y con



las enfermedades fruto de la pobreza crónica. Hubo avances también muy grandes en educación, la infraestructura de servicios y comunicaciones mejoró notablemente y además se inició el proceso de industrialización.

El tipo de planificación bajo métodos burocráticos y arbitrarios por la cúpula del PCCH en muchas ocasiones planteó objetivos delirantes. Así ocurrió durante el llamado Gran Salto Adelante (1958-1961), donde se impulsó la creación de un millón de "mini-acerías" en las granjas campesinas; el metal obtenido era de pésima calidad y prácticamente inservible, y otros proyectos similares, además de los efectos ambientales que provocó. De igual forma con la colectivización forzada del campo (realizada en esos mismos años según el modelo estalinista ruso de los años 30), que provocó millones de muertes

por hambre.

Al interior del PCCH además se fueron generando disputas facciosas enconadas y destructivas, las cuales tomaron fuerza a partir de los fracasos del Gran Salto Adelante y el reproche de sectores del partido contra Mao. Esto obligó a éste, conocido como el "Gran Timonel", a utilizar la fuerza de las masas que cuestionaban cierto acomodamiento de capas dirigenciales del partido, a lanzar la Revolución Cultural Proletaria (RCP) en 1966, donde Mao utilizó a estudiantes y a elementos del campesinado y del proletariado a saldar cuentas con otras facciones del partido. Pero cuando el proletariado motivado por esta movilización inició una serie de reivindicaciones, el maísmo uso el ejército para reprimir huelgas obreras.

El maísmo y la RCP no lograron trascender la lógica del socialismo en un solo país, al grado que tras el proceso de desestalinización en 1956 en la URSS y la asunción de un nuevo liderazgo en la burocracia soviética con Nikita Krushov, se da la ruptura con esta nación y la impugnación de la cohabitación pacífica entre esta y el imperialismo promulgada por el PCUS; situación que llevó a una serie de rupturas al interior

de partidos comunistas en el mundo, de los cuales quienes se asumieron pro-Pekín, impulsaron la denominada guerra popular prolongada.

La RCP y el manejo burocrático de la planificación seguía produciendo una serie de errores lamentables que llevaron, aun en vida de Mao, a hacer recambios, los cuales primero fueron un acercamiento con el imperialismo gringo durante el gobierno de Nixon. Se llegó a acuerdos de inversión de trasnacionales gringas en China; este ingreso de capital extranjero posteriormente, tras la muerte de Mao en 1976, con el nuevo liderazgo dirigido por Deng Xiao Ping (quien había perdido su cargo en la dirección y enviado a trabajar como obrero en el interior del país durante la RCP) impulsó el giro capitalista de China. ■

Continuará.....



CRISIS ECONÓMICA E INSEGURIDAD: FLAGELOS COTIDIANOS

Por Sebastián Ernesto González

A menos de 4 meses de las elecciones del 28 de noviembre de este año, dos temas muy importantes para la población, y, que, al parecer, ningún partido da muestras de ofrecer soluciones inmediatas son la asfixiante crisis económica y la inseguridad en cualquier lugar que sea. Sin duda alguna que los dos problemas van muy ligados, y a estos se unen la pérdida de institucionalidad en todo el engranaje público, principalmente en los referentes a los operadores de justicia.

El alto costo de sobrevivencia

Los 12 años de existencia del régimen post golpe y liderado por el Partido Nacional a través de su máximo representante; Juan Orlando Hernández, han sido un vía crucis para el pueblo hondureño en que la inflación absorbió los miserables salarios y el precio de la canasta básica se ha disparado verticalmente en comparación con los salarios recibidos. Según el informe de la Secretaría de Trabajo, la canasta básica ha subido de 9,003.60 a 9,095.85 lempiras (en el periodo enero-abril de 2021). Es muy importante saber que los productos de la canasta básica solo incluyen 29 alimentos entre carnes, verduras, lácteos, granos, pastas y pan.

Mientras el salario mínimo en promedio a la misma fecha era de 10,022.04 lempiras mensuales, (+ 926.15 % en comparación con el precio de la canasta básica), las cifras en rojo muy rápido aparecen en cualquier hogar del país en el que solamente trabaje un miembro, inmediatamente se ven en crisis al agregar los costos de los servicios públicos, transporte, medicina, educación, vestimenta, vivienda, lo cual vuelve la existencia en

vida al borde de la miseria.

En el 2020 el salario mínimo promedio fue de 10, 022.04 lempiras (variaron entre los 6,762.70 a 12,248.49 lempiras) y el que entró en vigencia a partir del 1 de julio del 2021 es de 10,422.98 (variando entre los 7,033.88 a los 13,228.37 lempiras). En Honduras se paga el salario mínimo de acuerdo al rubro y al tamaño de la empresa, según las cifras ya indicadas. Aun con este aumento la canasta básica se lleva casi la totalidad del salario.

A consecuencia de esta realidad que asfixia económicamente, los



hogares se las ingenian para sobrevivir, en muchos casos la madre y el padre salen a trabajar y dejan a los hijos solos, en otros hogares los niños también van a trabajar, se ha incrementado la mendicidad y lo peor aún, muchos terminan delinquir.

Impunidad incide en alto grado de inseguridad

El otro tema que ahoga y deprime a la población es el alto grado de inseguridad, para el crecimiento de este problema tiene que ver con el crimen organizado y el narcotráfico, según organismos de derechos humanos "el crimen organizado es responsable del 65 % de las muertes violentas en Honduras, país donde la impunidad supera el 90 %". LP (16/07/2021).

Según análisis correspondiente al

primer trimestre del año y brindado por INFOSEGURA y financiado por USAID "alrededor de 9 de cada 10 homicidios ocurren en espacios públicos, las y los jóvenes de 18 a 30 años son las principales víctimas de homicidios, alrededor del 43% de las víctimas estaba entre estas edades y el mayor incremento en muertes corresponde al grupo entre 15 y 17 años".

Honduras es calificado como uno de los países más violentos del mundo por el alto grado de violencia, pero a esto se suma el aumento en asaltos, delincuencia común, violencia doméstica, muy profundizados desde la época en que inició la pandemia en el 2019 y posteriormente a los huracanes Eta e Iota.

¿Trabajo y seguridad?

Una de las frases de campaña del partido gobernante y que la siguen pregonando es "Trabajo y seguridad", sin embargo, no han tenido resultados positivos en ninguno de los dos temas; al contrario, las familias se encuentran en crisis permanente y ni en las mismas casas de habitación existe seguridad, mientras el régimen sigue haciendo del "trabajo" su eslogan para vender el territorio con el nombre de ZEDE y asegurar que serán las zonas más seguras del mundo, la población sigue resignada a que en noviembre exista un cambio de régimen, sin embargo, hasta ahora, nadie parece encontrar la luz al final del túnel.

La población debe movilizarse para exigir la refundación del país y lo primero es adecentar los organismos operadores de justicia como la Corte Suprema y la fiscalía, que, por ahora, solo muestran estar al servicio de la dictadora totalmente sostenida por los militares. ■

TOD@S SOMOS 9 DE AGOSTO

Por Mario Carranza

Según la Organización de la Naciones Unidas (ONU) existen más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa el 6,2% de la población mundial. Según el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) a nivel de la región existen más de 60 pueblos originarios que representan cerca del 20% de la población total de Centroamérica. Según estimaciones del Banco Mundial las poblaciones indígenas ocupan un 15 del territorio mundial. Vale aclarar que estos datos referente a las poblaciones indígenas están sesgados a partir de intereses de las clases hegemónicas y de sus gobiernos así por ejemplo en el caso de El Salvador el último censo del 2007 reportaba que del total de la población salvadoreña (6, 218, 000) solo un 0,23% es indígena, mentira más grande del oficialismo quien quería borrar de las estadísticas a las poblaciones indígenas.

Un día para visibilizarnos

Nuestra apagada voz a duras penas y a regañadientes es escuchada en los fríos y videograbados salones de las diferentes dependencias de la ONU, bien sea en Nueva York o quizá en Suiza, al final y al cabo es lo que menos importa. Lo importante y novedoso es que, por caprichos de unos y presiones de otros se termina aprobando el 9 de agosto como el día internacional de los pueblos indígenas, mas a pesar de que en casi de un centenar de países existimos los indígenas, la gran mayoría de los gobiernos hacen oídos sordos a nuestras peticiones, y en vez de escuchar las demandas planteadas por nuestros espirituales hermanos y hermanas, doctos en los temas indígenas, estos son sistemáticamente perseguidos, capturados y reprimidos y luego de ser la mayoría de las veces brutalmente torturados, por defender nuestros Derechos Humanos y nuestros

derechos como indígenas y como si eso fuera poco, las legislaciones de cada estado, hechas están a la medida de la brutal ambición de la clase dominante, la que históricamente ha creado y condena a nuestros abuelos y abuelas mártires a un puñado de años de cárcel como para hacerles disque un escarmiento. Mas esos conceptos ya no hacen mella en nuestra conciencia pues nosotr@s los pueblos indígenas



no olvidamos.

Como indígenas herederos y dueños de nuestros territorios ancestrales exigimos respeto

Las enclenques democracias de Centroamérica y del mundo parecen desquebrajarse cada vez más con cada cambio de gobiernos, los cuales, más que perseguir el bienestar de las grandes mayorías; se dedican con sus sangrientos regímenes a complacer la eterna voracidad de unos cuantos, llamados clase dominante,

Estos tristes conceptos con sus pocas letras que les forman nos hacen tanto daño y nos niegan casi todo, muchas veces hasta nuestra existencia y si no veamos a nuestros abuelos Anastasio Mártir Aquino, de los Nonualcos 1833, Feliciano Ama, Luna y Marti del pueblo Nahua pipil 1932, y los más de 75 mil herman@s que ofrendaron sus vidas del 80 al 92 para que hoy sigamos igual o peor que antes. Y como dice un conocido mío "y así como pues".

Cada vez que un grupo quiere ser clase dominante de los países centroamericanos, terminan llevándonos de encuentro en sus

luchas por el poder y robando parte de nuestros territorios.

Florecer de las luchas

Si no saber del 9 de agosto nos da más derechos y autonomía a nuestros pueblos, bien venido sea. No se dé que sirve que se hable de tanto de derechos indígenas si en las comunidades indígenas nuestras hijas e hijos viven en el analfabetismo y que por más que se llenan la boca los gobernantes y su gobierno diciendo, "cero analfabetismo". Resulta que todo es populismo tercermundista, aplicado con más énfasis en toda nuestra sufrida pero valiente Abyayala.

Ante tanto genocidio, abuso, exclusión y despojo los pueblos originarios seguimos en pie de lucha y hoy más que nunca nuestra primavera indígena tímidamente pero fortalecida con cada sol que nos amanece se irá haciendo una realidad, la nueva realidad de nuestras hermanas y hermanos indígenas en todo el mundo.

Como hijos agradecidos defendamos la madre tierra

Que el 9 de agosto no sirva solo para medio recordar a nuestros abuel@s, herman@s de los pueblos indígenas; sino también para interiorizar que antes que nosotros existió y sigue existiendo la gran dadora se vida nuestra nantal, pachamama, mamacaca o como nosotr@s le conocemos la gran madre tierra .

Esa que a diario e independientemente del color, credo o nacionalidad impuesta muy gustosa y abundantemente nos da de comer, por tanto debemos cuidarla y protegerla siempre ya que somos ella y ella somos tod@s..

Vivan las comunidades indígenas que aún a costa de su propia vida se mantienen en acérrima defensa de sus territorios.

Y porque todos somos 9 de agosto, somos madre tierra y somos indígenas.. vivan los pueblos indígenas ■



A LUCHAR POR LA DEFENSA DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Por Rebeca Gonzalez

Partiendo de informes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) El Salvador cuenta con una población total de 6,825,935 de los cuales la población económicamente activa (PEA) es 3,117,001, de estos solamente 854,390 cuentan con un trabajo formal: 683,453 son trabajadores del sector privado y 185,255 del sector público.

En materia de trabajadores pensionados a la misma fecha se tenía un total de 177,397 de estos 43,943 (ISSS), 47,749 (INPEP) 80,818 (AFP), 3,921 (IPFSA) y 966 (Decreto 787). Vale señalar que de enero del 2021 a mayo del mismo año el número de pensionados aumento de 175,067 a 177,397. Ese aumento se dio sobre todo en pensionados de las AFP los cuales en esos 6 meses pasaron de 77,470 a 80,818. Mientras los pensionados ISSS se redujeron de 45,183 a 43,943.

Quien tiene el dinero de las cotizaciones

En 1996 bajo el gobierno arenero de Calderón Sol fue privatizado la administración de los fondos de pensiones, lo cual genero ganancias millonarias a los dueños de las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), mientras para a los trabajadores le ha tocado sobrevivir con pírricas pensiones.

Los fondos generados de las cotizaciones a las AFP eran administrados y puestos en el mercado internacional, ante la crisis financiera los gobiernos de ARENA y del FMLN usaron los fondos como caja chica y determinaron que dichos fondos tenían que ser invertidos en los Certificados de Inversión Previsional (CIP) pagando intereses mínimos, y pagando cuando ellos han querido. Según la Superintendencia de Pensiones, hasta mayo de 2021 el patrimonio de los trabajadores en las AFP era de \$12,812 millones (EDH.09/08/21). De

este monto el Estado les debe a los trabajadores un aproximado de \$9,500 millones, (80%). El restante 20% lo tienen las AFP invertidos en otros rubros. Lo anterior afecta directamente a los trabajadores, no así a las AFP ya que ellos siempre obtienen grandes ganancias solo por administrar.

¿Que busca el gobierno actual?

Los gobiernos de ARENA y del FMLN mantuvieron al Estado Salvadoreño en una política de endeudamiento e hicieron saqueos constantes de los fondos del Estado, al llegar el



Gobierno, Bukele y encontrar las arcas vacías del Estado y no tener de donde agarrar ha tenido que llevar al país a un endeudamiento histórico.

Si el Producto Interno Bruto fue en el 2020, de veinticuatro mil setecientos ochenta y cuatro millones de dólares y la deuda pública, de veintidós mil seis cientos cincuenta y cinco millones de dólares, significa que casi todo el PIB salvadoreño está endeudado, parte de esta deuda (20%) la tiene con los trabajadores.

Los prestamos constantes aprobados por la Asamblea Legislativa unido al bajo crecimiento económico, le dificultan al gobierno seguir gestionando mas prestamos es por ello que el gobierno de Bukele junto a sus Diputados pretende realizar reformas al actual sistema de pensiones, no para mejorar los montos de las pensiones, sino para borrar la deuda que el Estado y

su gobierno tienen con los trabajadores y así poder seguir prestando más.

Estatización bajo control de los trabajadores, pero que pague lo prestado

Si se va estatizar la administración del sistema de pensiones, esta debe estar bajo control de los trabajadores, la dirección de la administración debe ser tripartita en donde los trabajadores tengan mayor representación y sean electos democráticamente por las bases sindicales. Se debe exigir que toda propuesta de reforma al sistema de pensiones sea de conocimiento publica previa a su aprobación por los Diputados y que sean los trabajadores cotizantes y pensionados quien la ratifiquen así mismo que el gobierno pague lo más pronto la deuda de \$9,500 millones, y además pague los intereses correspondientes, debiéndosele prohibir al gobierno tomar los fondos de las pensiones.

Otros elementos a tomar en cuenta también serian: no aumentar el tiempo laboral ni la edad para pensionarse. Que sea voluntario estar o no estar en el sistema. Además que si los cotizantes quieren retirar todos sus ahorros así sea, y si desea que sea por cuotas que se respete la voluntad del dueño del ahorro. Si los fondos son invertidos que se le de al trabajador las ganancias generadas por la inversión. Si el cotizante fallece que sus ahorros sean otorgados a sus familiares lo cual debe ser retroactivo ya que muchos trabajadores han fallecido antes de jubilarse y las AFP se han quedado con dichos ahorros, como ha sucedido durante esta pandemia por el COVID-19.

Trabajadores y sindicatos deben estar prestos a luchar en defensa de los fondos de pensiones, no se trata de diferencias ideológicas o preferencias políticas, se trata de nuestros fondos.





PROYECTO DE LEY DE EMPLEO PÚBLICO: ¿UN INTENTO DE RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL?

Por José René Tamariz

La denominada Sala Constitucional o mejor conocida popularmente como Sala IV, utilizando la "técnica de la inconstitucionalidad por sus efectos y no por sí misma", realizó según los magistrados que la integran, una "exégesis" del proyecto de ley de empleo público de cara a la Constitución Política. Más adelante veremos los malabarismos constitucionales que realizan los jueces constitucionales que son una especie de supremo poder dentro de la Corte Suprema de Justicia, erigiéndose por encima de ella. Estos magistrados constitucionales son como un "oráculo" inapelable, lo que dicen ellos son "palabras y sentencias sagradas". Sin embargo, estos tipos que integran la Sala IV son defensores a ultranza del neoliberalismo en Costa Rica. Al final, partir de esas posiciones, emiten sus sentencias que muchas veces y casi generalmente van en contra de los trabajadores, ya sean del sector privado o público. Ese es el típico caso en contra de muchos artículos de diversas convenciones colectivas porque las consideran "abusivas".

Alrededor del "por tanto" de la sentencia de la Sala Constitucional y sus 35 inconstitucionalidades sobre el proyecto de ley de empleo público se han producido, básicamente, dos posiciones. La primera, encabezada por algunas organizaciones sindicales como la ANEP, juristas laboristas y otras organizaciones sociales que alaban y glorifican las "inconstitucionalidades" encontradas por los magistrados constitucionales en dicho proyecto de ley. Sostienen estos sectores que ese proyecto está políticamente liquidado y que no tiene futuro de ser aprobado definitivamente.

El otro sector de opinión es el neoliberal puro y duro, tales como los medios de comunicación del capital como el periódico "La Nación", abogados trasnochados como Rubén Hernández y demás fauna neoliberal. El leguleyo Hernández sostuvo al semanario Universidad que el trámite de ese proyecto de ley, después de esa sentencia, será "relativamente

simple", ya que la Comisión de Asuntos Jurídicos "únicamente debe incorporar un artículo que determine que los cuestionados por la Sala Constitucional no se apliquen a las instituciones señaladas". (Semanao Universidad, 4 de agosto de 2021). A su vez, el periódico "La Nación" plantea que "En lo esencial, la ley quedó incólume y sus efectos favorables sobre el gasto público, la equidad y el orden son indudables". (La Nación 4 de agosto de 2021. Ambos sectores ensalzan los aspectos que necesitan resaltar y que le son favorables. Veamos.

Un intento de modificación de la constitución sin Asamblea Constituyente

Tanto los neoliberales del poder Ejecutivo que elaboraron el proyecto de ley de empleo público como los diputados neoliberales que realizaron cambios a dicho proyecto y lo aprobaron en primer debate, intentaron por la vía de una ley ordinaria hacer cambios de fondo y contenido en la Constitución Política sin ser ellos constituyentes. Es decir, que hubo una intentona de violación flagrante y evidente al diseño institucional de separación de poderes (poder judicial y poder electoral) y a las diversas autonomías institucionales, organizativas y políticas de las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de las municipalidades.

Desde ese punto de vista, los neoliberales del Poder Ejecutivo y Legislativo quisieron introducir cambios de fondo y sustantivo al orden constitucional mediante una ley ordinaria. Eso en realidad constituye una cuestión grave y peligrosa a la institucionalidad que merece ser castigada. No es poca cosa, es gravísimo. Este aspecto de fondo es minimizado por los neoliberales del poder Ejecutivo y legislativo, así como de los medios de comunicación del capital y toda la jauría neoliberal que plantea que dicho proyecto de ley se mantiene incólume en sus aspectos medulares y que puede y debe ser aprobado en segundo debate, pasando por alto la gravedad de la intentona

de ruptura al orden constitucional que intentaron realizar. Aquí se debe realizar una campaña para que esa intentona no quede sin castigo.

¿Por qué se intentó desde el Poder Ejecutivo y Legislativo romper el orden constitucional? ¿Por qué tantas inconstitucionalidades en ese proyecto de ley de empleo público? Ojo, aquí no estamos planteando que hubo un intento de golpe de Estado. Ese planteamiento no sería correcto, ya que los golpes de Estado se realizan desde las fuerzas armadas o de un sector de ellas. Lo que aquí se ha producido es que por la vía de una ley ordinaria se pretendía cambiar la Constitución Política para evadir los controles de otros poderes, como el judicial y desaparecer las diversas autonomías institucionales. En otras palabras, el poder Ejecutivo y Legislativo pretendían ejercer un control total y absoluto sobre las diversas instituciones estatales e imponer su voluntad en diversos campos. La ruptura del orden constitucional que se pretendía no era cambiar o quitar al gobierno porque el ejecutor de esa ruptura institucional era el propio poder Ejecutivo, sino que éste y demás sectores neoliberales de la Asamblea Legislativa intentaron destruir el modelo y arquitectura institucional existente y contemplado en la Constitución Política. Existen dos posibles explicaciones al respecto o bien, mejor dicho, una combinación de ambas posibilidades. Veamos.

La primera, que planteó desde hace muchos años John Stuart Mill en su libro "Consideraciones sobre el Gobierno Representativo" o simple y sencillamente, desprenderse de controles y amarras que tienen para evitar el control político, administrativo y organizativo de toda la institucionalidad del país. Analicemos.

Según Stuart Mill "La tendencia natural del gobierno representativo de la civilización moderna, se inclina hacia la mediocridad colectiva; esta tendencia aumenta con todas las reducciones y extensiones del derecho político, y tiene como efecto depositar el poder principal en manos de las clases que están muy por debajo del nivel más elevado de



instrucción de la comunidad...". (Stuart Mill, John: Consideraciones sobre el Gobierno Representativo). Es por todos conocidos que la mayoría de los altos funcionarios y mandos medios del gobierno, así como la mayoría de los diputados/as son un puñado de ignorantes e intelectualmente mediocres que no saben de leyes, mucho menos elaborarlas, por eso viven remendando casi todas las leyes que se aprueban. Por otro lado, no sólo es ignorancia y mediocridad intelectual y política, sino que se produjo una clara intentona, mediante el proyecto de ley de empleo público, de realizar un giro autoritario en la dirección de imponer un control absoluto sobre todos los poderes de la República y de las instituciones autónomas, desapareciéndolas, aunque se encuentra claramente protegidas por la Constitución Política. Entonces, lo que se produce es una combinación de ambos aspectos en la intentona de ruptura del orden constitucional por parte del poder Ejecutivo y Legislativo.

El presidente de la Sala IV, Fernando Castillo, un neoliberal confeso por sus sentencias, aunque intenta minimizar el intento de ruptura del orden constitucional mediante la ley de empleo público se ve obligado, en una entrevista concedida al periódico "La Nación", a declarar la gravedad de ese proyecto de ley en cuanto a la invasión al poder Judicial y demás instituciones autónomas. En una parte de sus declaraciones a ese medio del capital, Castillo sostiene que "Si usted sigue leyendo el artículo 98, 99 y 100, dice cosas tan graves como esta, graves en el sentido para un órgano que goza de independencia o que tiene grados de autonomía, que dice que quien de forma reiterada y sin justificación -dice la ley- descató una directriz, podrá el Poder Ejecutivo remover el órgano jerárquico que está descatando. Imagínese eso en relación con el Poder Judicial, la Corte Plena, el Consejo Superior o un concejo municipal, el Consejo Universitario, un rector. Eso hace que la facultad de dirección resulte incompatible con la independencia y las autonomías...". (La Nación, 4 de agosto de 2021). Es decir, que esos artículos autorizaban de forma clara, en abierta violación a

la independencia de poderes y de las autonomías institucionales, destituir a órganos y máximas autoridades del Poder Judicial, municipalidades, universidades públicas y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Más allá de que la intentona de ruptura del orden constitucional por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo fue frenado e impedido de ejecutarse de forma timorata por los magistrados de la Sala Constitucional, existe un aval



y luz verde por parte de esos mismos magistrados para que el proyecto de ley de empleo público, una vez remendado acatando su sentencia, se apruebe y aplique en todos sus extremos a todos los poderes de la República e instituciones autónomas. ¿Qué significa lo anterior?

Que el gobierno impondrá el salario global o único y demás aspectos de dicho proyecto de ley a todos los empleados públicos, sin excepción, ya sean nuevos o viejos lo cual manda al cesto de la basura los derechos adquiridos. Esto modifica todo el sistema de los salarios y empleo público. En el Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) e instituciones autónomas les corresponde a los órganos encargados de esas instituciones aplicar el proyecto de ley de empleo público una vez que se convierta en ley. Así lo sostiene el presidente de la Sala IV que los trabajadores al declarar que "Entonces, lo que sí queda claro, por lo menos en el caso de las universidades y también de los poderes del Estado, es que todo lo que tenga ver con la aplicación de ley que será una competencia exclusiva y excluyente de los órganos máximos

de las universidades y de los poderes del Estado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con evaluación de desempeño, todo lo que tiene que ver con la construcción de las familias de puestos, con los grados en las distintas familias, los factores relevantes para asignar puntos..., todo eso, en lugar de hacerlo Mideplán en relación con estos poderes y estos entes con autonomía, corresponderá a los máximos jerarcas velar por la correcta interpretación y aplicación de la ley en sus respectivos ámbitos, competencia que son exclusivas y excluyentes". (Ídem). Más claro no se puede ser.

Por otra parte, el carácter neoliberal y anti-obrero de esa sentencia se manifiesta en la cuestión de las convenciones colectivas en el sector público. Los magistrados de la Sala IV avalan que los trabajadores al negociar sus convenciones colectivas NO puedan negociar reajustes salariales ni incentivos económicos.

En otras palabras, esas convenciones son vaciadas de contenido y se convierten en simples reglamentos de trabajo. Aquí existe una flagrante violación al derecho colectivo de los trabajadores en el sector público. Asimismo, la Sala Constitucional avala y da luz verde al gobierno para que despida de forma masiva a los empleados públicos, le imponga la evaluación de desempeño que quieran y así, sucesivamente, pasará con todos los demás aspectos anti-obrero de ese nefasto y fatídico proyecto de ley, una vez convertido en ley de la República.

Todas las organizaciones sindicales, bloques sindicales, confederaciones sindicales y demás organizaciones sociales y populares deben realizar la más amplia unidad de acción para impulsar las movilizaciones y la huelga general que enfrente en las calles a ese nefasto proyecto ley, antes de que se produzca el segundo debate en la Asamblea Legislativa. Ese es el único camino y posibilidad de impedir que ese proyecto se convierta en ley. No se debe depositar confianza en ningún órgano o poder del Estado para frenar ese fatídico proyecto. ■



LA LIQUIDACIÓN DEL PARTIDO CxL.

Por *Victoriano Sánchez*

Habiendo aplastado militarmente a la rebelión de abril del 2018, la dictadura Ortega-Murillo tiene la estrategia de evitar que los grupos opositores utilicen la coyuntura electoral para fortalecerse y disputarle el poder. Esta estrategia contempla promover la abstención, desmoralizar a los votantes, para con el voto duro del FSLN ganar "limpiamente" las elecciones de noviembre de este año.

Machacando a la oposición

Contrario a lo esperado, en vez de producirse una mínima apertura democrática, la dictadura Ortega-Murillo redujo abruptamente los espacios democráticos, aprobó leyes represivas y las utilizó en el último periodo para desarticular a la oposición.

El primer bloque que fue barrido de la escena, fue la llamada Coalición Nacional (CN), cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló la personalidad jurídica del Partido de la Restauración Democrática (PRD), que era la casilla con la que la CN pretendía librar la batalla electoral. Después le fue cancelada la personalidad jurídica al Partido Conservador de Nicaragua (PCN), un pequeño partido de derecha.

En ese contexto, solo quedaba la Alianza Ciudadana por la Libertad (ACxL), que utilizaba la casilla del Ciudadanos por la Libertad (CxL) y del partido regional Partido Movimiento de Unidad Costeña (PAMUC).

En el ínterin, utilizando la Ley No 1055, el régimen comenzó a encarcelar a los principales dirigentes de los grupos de oposición, incluidos operadores políticos de los grupos del gran capital. La represión selectiva produjo una estampida de periodistas y dirigentes quienes abandonaron el país. Quienes no pudieron salir, fueron encarcelados, o son llamados a declarar ante la Fiscalía, en el juicio por lavado de dinero contra Cristiana Chamorro y

FUNIDES.

Un anormal proceso electoral

Muchos vieron el proceso electoral como la oportunidad para solucionar la crisis, abierta con la rebelión de abril del 2018, pero no fue así. En vez de producirse una apertura democrática, por muy limitada que fuese, se produjo lo contrario: un apriete de tuercas contra la oposición. Encarcelamiento de candidatos, cancelación de personalidades jurídicas de partidos de



oposición, amenaza de juicios penales contra periodistas y los liderazgos de la oposición, etc.

Esta inusual oleada represiva en medio del proceso electoral, ha sido condenada por el departamento de Estados de los Estados Unidos, y por la Unión Europea (UE), quienes han emitido sendos comunicados y notas de prensa denunciando la deriva autoritaria de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Tanto Estados Unidos como la UE han amenazado con desconocer el resultado de las elecciones de noviembre, por la ausencia de condiciones mínimas democráticas. Evidentemente, que la dictadura Ortega-Murillo sabe lo que hace, y está enarbolando la bandera en contra del injerencismo, para blindarse contra los ataques de Estados Unidos y la UE.

Golpe mortal contra CxL

La dictadura ha ido estrechando

el cerco legal e institucional contra el único grupo que quedaba en pie: el partido CxL. Al parecer, la verificación de 2,8 millones de personas encendió las alarmas. Era un claro indicio que la mayoría de la población quiere un cambio de gobierno, y votaría por la única opción que quedaba en pie. Quienes se postulaban como posibles candidatos por la ACxL, fueron encarcelados o forzados a irse al exilio. Al final, acorralado, CxL decidió una lista de candidatos del núcleo duro de su partido, presentó la candidatura presidencial de Oscar Sobalvarro, antiguo cabecilla de la contra, y la ex miss nicaragua, Berenice Quezada.

A pesar de su extrema debilidad, CxL podía convertirse en una alternativa electoral, tomando en cuenta la intención de votar, que se manifestó en la alta participación de la verificación ciudadana.

Por una denuncia de María Haydee Osuna, presidenta y representante legal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), los magistrados del CSE resolvieron el pasado 6 de agosto cancelar la personalidad jurídica de CxL, y hasta cancelaron la ciudadanía nicaragüense de Kitty Monterrey, presidenta y representante legal de CxL, quien, siendo hija de nicaragüense nació en Estados Unidos y por lo tanto tiene dos nacionalidades de origen. Monterrey tuvo que irse al exilio a Costa Rica. CxL está descabezado, y la oposición de derecha no tiene casilla electoral, lo que aumenta enormemente la ventaja del FSLN sobre los resultados electorales.

Esta arriesgada movida de la dictadura, al eliminar la competencia electoral, y dejar que participen pequeños partidos aliados, llamados "zancudos", aumentará la abstención, pero lejos de resolver la crisis, la profundiza a niveles insospechados y cuyos resultados finales son difíciles de prever. ■